

OEA/Ser.L/V/II  
Doc. 364  
29 diciembre 2023  
Original: español

**INFORME No. 338/23**  
**PETICIÓN 515-08**  
INFORME DE INADMISIBILIDAD

VÍCTOR HUGO SEQUEIRA CASTILLO  
COSTA RICA

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 29 de diciembre de 2023.

**Citar como:** CIDH, Informe No. 338/23. Petición 515-08. Inadmisibilidad.  
Víctor Hugo Sequeira Castillo. Costa Rica. 29 de diciembre de 2023.

## I. DATOS DE LA PETICIÓN

<b>Parte peticionaria:</b>	Carmen Luisa Morales Fernández
<b>Presunta víctima:</b>	Víctor Hugo Sequeira Castillo
<b>Estado denunciado:</b>	Costa Rica
<b>Derechos invocados:</b>	Artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos <sup>1</sup>

## II. TRÁMITE ANTE LA CIDH<sup>2</sup>

<b>Presentación de la petición:</b>	28 de abril de 2008
<b>Información adicional recibida durante la etapa de estudio:</b>	13 de abril de 2010, 31 de enero de 2011, 15 de septiembre de 2011, 13 de marzo de 2013, 16 de julio de 2013, 24 de julio de 2013, 16 de septiembre de 2013, 9 de octubre de 2013, 11 de diciembre de 2013, 5 de febrero de 2014, 20 de marzo de 2014, 10 de junio de 2014, 9 de julio de 2014, 7 de agosto de 2014, 2 de enero de 2015, 21 de enero de 2015 y 29 de marzo de 2016
<b>Notificación de la petición al Estado:</b>	3 de octubre de 2016
<b>Primera respuesta del Estado:</b>	21 de marzo de 2017
<b>Observaciones adicionales de la parte peticionaria:</b>	20 de junio de 2017, 14 de julio de 2017, 3 de septiembre de 2020, 16 de septiembre de 2020, 15 de enero de 2021 y 11 de mayo de 2022
<b>Observaciones adicionales del Estado:</b>	21 de octubre de 2020 y 8 de agosto de 2023

## III. COMPETENCIA

<b>Competencia <i>Ratione personae</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione loci</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione temporis</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione materiae</i>:</b>	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 8 de abril de 1970)

## IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

<b>Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:</b>	No
<b>Derechos declarados admisibles:</b>	Ninguno
<b>Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:</b>	Sí, en los términos de la sección VII
<b>Presentación dentro de plazo:</b>	Sí, en los términos de la sección VII

## V. POSICIÓN DE LAS PARTES

### *Alegatos de la parte peticionaria*

1. La parte peticionaria denuncia que el señor Sequeira Castillo no tuvo acceso a un recurso que permita la revisión integral de su condena por los delitos de peculado y negocios incompatibles. Asimismo, señala que la presunta víctima también sufrió la vulneración a su derecho a contar con un juzgado

<sup>1</sup> En adelante, "la Convención Americana" o "la Convención"

<sup>2</sup> Las observaciones de cada parte fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.

imparcial, debido a los jueces que resolvieron el primer recurso de casación que presentó ya habían participado previamente en la emisión de su sentencia condenatoria de primera instancia.

2. Informa que el 23 de abril de 2007 el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José condenó al señor Sequeira Castillo a quince años de pena privativa de libertad por los delitos de peculado y negocios incompatibles con la función pública. Refiere que la defensa de la presunta víctima planteó un recurso de casación contra tal decisión, arguyendo: i) la falta de correlación entre la acusación y la sentencia; ii) la incorrecta valoración de la prueba; iii) la ausencia de fundamentación de la pena; y iv) la errónea aplicación de la ley penal. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2007 la Sala Tercera de la Corte Suprema rechazó este recurso, al considerar que no se aportaron elementos que permitan identificar algún error en la decisión de primera instancia.

3. Ante ello, afirma que en el 2008 el señor Sequeira Castillo planteó un procedimiento de revisión, cuestionando la afectación al principio de imparcialidad, pues dos de las magistradas que conformaron la Sala que desestimó su recurso de casación ya habían participado previamente en el fallo de primera instancia. En razón a ello, informa que en diciembre de 2013 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló la citada decisión de segunda instancia e indicó que emitirían una nueva decisión al respecto, por medio de una conformación de magistrados/as. De este modo, indica que el 20 de junio de 2018 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de casación planteado por el señor Sequeira, al concluir que la sentencia condenatoria de primera instancia no contenía vicios que ameriten su nulidad.

4. No obstante, a criterio de la parte peticionaria, la citada decisión no garantizó el derecho del señor Sequeira Castillo a contar un pronunciamiento que revise integralmente su condena de primera instancia, en tanto la citada instancia no valoró integralmente los cuestionamientos que presentó.

#### *Alegatos del Estado*

5. Por su parte, el Estado replica que la petición es inadmisibles por falta de agotamiento de la jurisdicción doméstica. Destaca que, al momento de la presentación del presente reclamo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto el recurso de casación presentado por el defensor de la presunta víctima. En ese sentido, sostiene que, toda vez que el citado órgano recién desestimó dicho recurso el 20 de junio de 2018, la Comisión debe declarar inadmisibles el reclamo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana.

6. En sentido similar, sostiene que el señor Sequeira Castillo tampoco utilizó oportunamente los mecanismos especiales de revisión ideados a partir de las reformas procesales realizadas en favor de las personas con sentencia firme. Respecto a este punto, destaca que la presunta víctima no empleó dichas vías, a pesar de que están ideadas precisamente para aquellas personas con sentencias condenatorias en firme y que consideran vulnerado su derecho a recurrir su fallo condenatorio, de conformidad con el artículo 8.2.h) de la Convención. En esa línea, el Estado manifiesta que al momento en que se le notificó de esta petición, el señor Sequeira Castillo tuvo la oportunidad de interponer los procedimientos especiales de revisión establecidos en las disposiciones transitorias I y III de la Leyes N.º 8503 y 8837, respectivamente. Por ende, arguye que el ordenamiento interno disponía de una opción adicional para que la presunta víctima pueda utilizarla en el momento procesal oportuno, y a pesar de ello no uso esta vía.

7. Por último, Costa Rica plantea que los hechos alegados no caracterizan una violación de derechos humanos que le sea atribuible. Por el contrario, arguye que la parte peticionaria pretende que la Comisión actúe como una cuarta instancia judicial y revise las valoraciones de hecho y de derecho efectuadas por los jueces y tribunales internos que actuaron en la esfera de su competencia, sin demostrar que estos hayan vulnerado algún derecho reconocido en la Convención. En particular, destaca que el peticionario solo manifiesta su disconformidad con las decisiones internas, a pesar de que la vía de casación dio una respuesta integral a todos sus cuestionamientos.

## VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

8. La Comisión observa que el objeto principal de la presente petición se centra en cuestionar la afectación al derecho a recurrir el fallo, contemplado en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. En razón a ello, dado que se han emitido distintas decisiones dentro del sistema interamericano sobre esta temática, en función de las modificaciones implementadas en la legislación procesal penal costarricense, la CIDH estima necesario realizar un recuento de estos pronunciamientos a efectos de identificar estándares que permitan resolver adecuadamente la presente petición.

9. Así, la CIDH recuerda que en la sentencia del caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* del 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos<sup>3</sup> examinó la regulación establecida en el Código Procesal Penal vigente desde 1998; y concluyó que no contaba con *“un recurso que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior”*, dada las limitaciones que tenía la regulación del recurso de casación en el ámbito penal<sup>4</sup>. En consecuencia, la Corte IDH declaró que el Estado costarricense violó el artículo 8.2.h) de la Convención en relación con sus artículos 1.1 y 2 en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa, al no haber garantizado su derecho a recurrir el fallo; y ordenó a Costa Rica *“adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, en relación con el artículo 2 de la misma”*<sup>5</sup>.

10. Como consecuencia de esta sentencia, Costa Rica reformó la regulación de su sistema procesal penal a efectos de contar con una regulación acorde con las obligaciones contempladas en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. Así, el 6 de junio de 2006 entró en vigor la Ley No. 8503, denominada *“Ley de Apertura de la Casación Penal”*, la cual modificó y adicionó distintos artículos del Código Procesal Penal relacionados con los recursos de casación y revisión. Asimismo, tal legislación estableció en su Transitorio I, un procedimiento de revisión especial para *“las personas condenadas por un hecho delictivo con fecha anterior a esta Ley, a quienes se les haya obstaculizado formular recurso de casación contra la sentencia, en razón de las reglas que regulaban su admisibilidad en aquella fecha [...] invocando, en cada caso, el agravio y los aspectos de hecho y de derecho que no fueron posibles de conocer en casación”*. En virtud de ello, la Corte Interamericana consideró que *“a través de la causal de revisión creada por el Transitorio I, una persona condenada penalmente podría, en principio, obtener una revisión integral de su sentencia que incluya tanto cuestiones de hecho como de derecho”*<sup>6</sup>.

11. Asimismo, y en lo relevante para el presente caso, la citada ley incorporó diversas modificaciones al régimen legal del recurso de casación contenido en el Código Procesal Penal. En primer término, se adicionó a la nómina de vicios de la sentencia que justifican la casación del art. 396 una nueva causal consistente en que *“la sentencia no haya sido dictada mediante el debido proceso o con oportunidad de defensa”*. En segundo lugar, y con respecto a la amplitud del examen del tribunal de casación, la ley 8503 incorporó el artículo 449 bis al Código Procesal Penal, el cual reza:

El Tribunal de Casación apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. De no tener registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en casación la prueba oral del juicio que, en su criterio, sea necesaria para examinar la procedencia del reclamo, y la valorará en relación con el resto de las actuaciones.

De igual manera, podrá valorar en forma directa la prueba que se haya introducido por escrito al juicio.

<sup>3</sup> En adelante, la “Corte Interamericana” o la “Corte IDH”.

<sup>4</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 167.

<sup>5</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 198.

<sup>6</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 262.

12. Adicionalmente, tanto la Comisión como la Corte IDH también constataron que el 9 de junio de 2010 se publicó la Ley No. 8837, denominada “Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”, vigente a partir del 9 de diciembre de 2011; la cual creó y reguló el recurso de apelación. Además, el Transitorio III de dicha norma reguló dos supuestos adicionales: i) para las personas cuyas sentencias estaban firmes para el momento de entrada en vigencia de la ley, se estableció que pueden interponer, por única vez, un procedimiento de revisión en los primeros seis meses; y ii) para las personas cuyos recursos de casación se encontraban pendientes de resolución al momento de la entrada en vigencia de la ley, se estableció que podían solicitar la conversión del recurso de casación ya presentado a uno de apelación conforme a la nueva norma.

13. Como consecuencia de las citadas modificaciones, en la sentencia del caso *Amrhein y otros vs. Costa Rica* del 25 de abril de 2018, la Corte Interamericana evaluó nuevamente la regulación procesal penal costarricense; y amplió sus criterios jurídicos tanto respecto al agotamiento de la jurisdicción interna, como al análisis de fondo de casos sobre la misma temática.

14. En relación con el primer punto, la Comisión destaca que, en el citado caso, la Corte IDH consideró que las presuntas víctimas debieron haber interpuesto el recurso de revisión especial con base en el Transitorio I de la Ley 8503 de 2006 durante el trámite de admisibilidad de la petición, pues estaba destinado específicamente a personas con condenas ya en firme; y por ello, “*el hecho de que se trataría de un recurso extraordinario no puede ser determinante, per se, para concluir su ineffectividad*”. En consecuencia, siguiendo la citada jurisprudencia, la Comisión considera que a efectos de determinar la admisibilidad de un asunto sobre esta temática debe determinar si la citada vía recursiva estuvo a disposición de las presuntas víctimas tras la emisión de su condena, y de ser este el supuesto, verificar si agotaron o no tal recurso.

15. Finalmente, a efectos del análisis de caracterización de las peticiones, la Comisión nota que la Corte Interamericana concluyó en la citada sentencia que no correspondía “*declarar una violación al artículo 2 de la Convención Americana por la forma en que está regulado el sistema recursivo costarricense, ni por la forma en que dicho Estado atendió la situación de personas cuyas sentencias ya estaban en firme con anterioridad a la vigencia de las Leyes 8503 y 8837, ya que, a través de dichas reformas, subsanó las deficiencias en la aplicación de las normas recursivas [...]*”<sup>7</sup>. Asimismo, recuerda que en la resolución de supervisión de cumplimiento del 22 de noviembre de 2010 del caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, el Tribunal valoró positivamente las reformas introducidas en la legislación procesal penal; y en virtud de tales modificaciones concluyó que “*al garantizar la posibilidad de un amplio control de la sentencia emitida por un tribunal de juicio en materia penal a nivel interno*”<sup>8</sup>, Costa Rica había cumplido con adecuar su legislación interna.

16. Sin perjuicio de ello, la Comisión destaca que las citadas normas reconocieron a aquellas personas cuyas sentencias condenatorias ya habían adquirido calidad de cosa juzgada la posibilidad de interponer un procedimiento de revisión, aunque supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos. En el caso de la ley 8503, la Comisión destaca que se exigía que el recurrente invoque en su presentación “*el agravio y los aspectos de hecho y derecho que no fueron posibles de conocer en casación*”. Por su parte, el Transitorio III de la ley 8837 demandaba para la procedencia del procedimiento de revisión que el condenado “*haya alegado con anterioridad la vulneración del artículo 8.2.h de la Convención*”.

17. En tal sentido, la Comisión reafirma que la manera en que se encontraba regulado el procedimiento de revisión establecido por el Transitorio I de la ley 8503 podía generar limitaciones en términos de la accesibilidad del recurso, y, en consecuencia, no garantiza en sí mismo el derecho a la revisión integral del fallo condenatorio a todos aquellos que fueron condenados durante la vigencia del texto originario del Código Procesal Penal<sup>10</sup>. Idéntica conclusión cabe realizar respecto del recurso de revisión consagrado en

<sup>7</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 48.

<sup>8</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 265.

<sup>9</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2010, párr. 16.

<sup>10</sup> CIDH. Informe No. 33/14. Caso 12.820. Fondo. Manfred Amrhein y otros. Costa Rica. 4 de abril de 2014. Párr. 217 a 220.

el Transitorio III de la ley 8837, toda vez que la norma incluía la exigencia de haber alegado previamente la vulneración del derecho al recurso como un requisito de procedibilidad del recurso de revisión.

18. No obstante, la Comisión reconoce, en primer término, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se refirió en reiterados pronunciamientos a la necesidad de “*asegurar el derecho al recurso, excluyendo formalismos que impidieran la revisión de las sentencias de condena, a fin de satisfacer lo dispuesto por el artículo 8.2.h de la Convención*”<sup>11</sup>.

19. Asimismo, la CIDH considera que, a pesar de los obstáculos a la procedencia del recurso incorporados en la redacción del Transitorio I de la ley 8503, el recurso de revisión allí reconocido significó una oportunidad adicional al recurso de casación para que una persona condenada pudiera obtener una revisión integral de su sentencia. Dicha revisión integral dependía, en esencia, de la forma en que los jueces de los tribunales de alzada interpretaban las normas procesales vigentes a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, del artículo 8.2.h de la Convención Americana y de lo decidido por la Corte IDH en el caso *Herrera Ulloa*.

20. En particular, y en línea con lo decidido por la Corte, la Comisión observa que, teniendo en cuenta que tales modificaciones legislativas al sistema recursivo costarricense fueron adoptadas como resultado de los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano de derechos humanos, resulta razonable como causal de admisibilidad del recurso que los interesados deban invocar los posibles errores que hubiera podido cometer el juez o tribunal de la instancia inferior.

21. En consecuencia, teniendo en cuenta las especificidades existentes respecto de este tema en el sistema costarricense, como resultado de las sentencias dictadas por el Sistema Interamericano, y concretamente con lo señalado por la Corte IDH en el caso “*Amrhein*”, la Comisión considera que no resulta apropiado realizar una evaluación en abstracto de cada uno de los recursos disponibles en la legislación procesal penal, sino que se debe efectuar “*un análisis, caso por caso, de los recursos efectivamente interpuestos por las presuntas víctimas a fin de determinar si la forma en que éstos fueron resueltos en el sistema recursivo costarricense, tomando en cuenta sus reformas, respetaron el derecho de aquellas a una revisión integral de sus sentencias condenatorias*”<sup>12</sup>. Lo que en principio requiere de un análisis de fondo por parte de la CIDH, salvo que de la información de las partes se observe que los hechos planteados por el peticionario no caractericen *prima facie* violaciones a la Convención Americana, en los términos de su artículo 47.

## VII. ANÁLISIS DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

22. Respecto al cuestionamiento del Estado sobre el hecho de que el agotamiento de la jurisdicción doméstica se produjo con posterioridad a la presentación de la petición, la CIDH reitera su posición constante según la cual el análisis sobre los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención debe hacerse a la luz de la situación vigente al momento en que se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del reclamo. Es muy frecuente que, durante la tramitación, haya cambios en el estado de agotamiento de los recursos internos. No obstante, el sistema de peticiones y casos asegura que tanto el Estado como el peticionario tengan la plena oportunidad para presentar información y alegatos al respecto<sup>13</sup>.

23. Con base en las consideraciones previamente expuestas, la Comisión observa que, en el presente caso, el 20 de junio de 2018 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de casación presentado por la presunta víctima contra su sentencia condenatoria de primera instancia.

24. Al respecto, si bien el Estado plantea que el señor Sequeira Castillo podía utilizar el procedimiento especial de revisión contemplado en el Transitorio I de la Ley N.º 8503, la Comisión nota que,

<sup>11</sup> Corte IDH. *Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 260.

<sup>12</sup> Corte IDH. *Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 266.

<sup>13</sup> CIDH, Informe No. 35/16, Petición 4480-02. Admisibilidad. Carlos Manuel Veraza Ustusuástegui. México. 29 de julio de 2016, párr. 33.



conforme al texto de la citada disposición, esta vía solo podía ser utilizada por personas condenadas con anterioridad al 6 de junio de 2006, fecha de promulgación de la referida ley. En tal sentido, a juicio de la Comisión, el referido mecanismo no estaba a disposición de la presunta víctima, dada la fecha en que se emitió su condena, y por ende no resulta exigible su agotamiento a efectos de cumplir con el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana.

25. Sin perjuicio de ello, el Estado plantea que la presunta víctima también podía presentar el procedimiento especial de revisión contemplado en el Transitorio III de la Ley N.º 8837, dado que este entró en vigor el 9 de diciembre de 2011. Sin embargo, la Comisión recuerda que, como regla general, la parte peticionaria solo tiene en principio la obligación de agotar las vías ordinarias a nivel interno<sup>14</sup>. En tal sentido, si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma internacional está cumplida<sup>15</sup>.

26. En el presente asunto, la Comisión considera que, por la forma cómo se encuentra regulado y por su posición dentro del procedimiento penal costarricense, el procedimiento especial de revisión contemplado en el Transitorio III de la Ley N.º 8837 es extraordinario y, en consecuencia, su agotamiento no resultaba obligatorio para la presunta víctima, en tanto esta cumplió con utilizar previamente un recurso en principio adecuado para remediar su situación. Sin perjuicio de ello, la Comisión destaca que no resulta claro si, para la situación de la presunta víctima, el citado procedimiento de revisión era idóneo para remediar la afectación alegada, toda vez que exige que previamente se haya alegado en otra vía la afectación del derecho contemplado en el artículo 8.2.h) de la Convención.

27. En consecuencia, toda vez que en el presente caso la presunta víctima utilizó la citada vía de casación, la Comisión considera que el Estado tuvo la oportunidad de solventar la situación denunciada y, por ende, se cumple el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana. Asimismo, dado que la decisión que agotó la jurisdicción interna se emitió mientras el presente asunto se encontraba bajo estudio de admisibilidad, la Comisión concluye que también se cumple el requisito de plazo previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención.

## VIII. ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS

28. La Comisión identifica que la parte peticionaria cuestiona, principalmente, dos asuntos puntuales: i) la afectación al derecho a recurrir el fallo; y ii) la vulneración al derecho a contar con un juzgado imparcial.

29. Sobre el primer aspecto, la Comisión recuerda que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía es una de las garantías mínimas que tiene toda persona sometida a una investigación y proceso penal. Su finalidad es asegurar la revisión de una sentencia adversa de manera tal de que se tenga la posibilidad de corregir decisiones judiciales contrarias a derecho y evitar que una decisión injusta adquiera calidad de cosa juzgada<sup>16</sup>. En esa línea, la Comisión reitera que resulta irrelevante para el derecho internacional de los derechos humanos la denominación o el nombre con el que se designe el recurso disponible<sup>17</sup>. Lo importante es que el recurso contemplado en la normativa interna satisfaga una serie de

<sup>14</sup> CIDH, Informe No. 161/17, Petición 29-07. Admisibilidad. Andy Williams Garcés Suárez y familia. Perú. 30 de noviembre de 2017, párr. 12.

<sup>15</sup> CIDH, Informe No. 70/04, Petición 667/01, Admisibilidad, Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros, Jubilados de la empresa venezolana de aviación VIASA. Venezuela, 15 de octubre de 2004, párr. 52.

<sup>16</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párr. 158 a 161; Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260. Párr. 242.

<sup>17</sup> Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 165; ONU, Comité de Derechos Humanos. Gómez Vázquez v. España. Comunicación No. 701/1996. Decisión de 11 de agosto de 2000, párr. 11.1.

estándares y, en tal sentido, cumpla con ser oportuno<sup>18</sup>, accesible<sup>19</sup>, eficaz<sup>20</sup> y, en particular, que permita la revisión integral de la condena<sup>21</sup>.

30. En torno a este último punto, la Comisión Interamericana indicó en el caso Abella respecto de Argentina:

[E]l artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. En este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder [...] con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación, de normas de Derecho que determinen la parte resolutoria de la sentencia. La Comisión considera, además, que, para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas<sup>22</sup>.

31. En esa línea, la CIDH ha destacado que, si bien el derecho a recurrir no implica necesariamente un nuevo juicio o una nueva audiencia, siempre que el tribunal que realiza la revisión no esté impedido de estudiar los hechos de la causa, resulta necesario a la luz del artículo 8.2.h de la Convención que exista la posibilidad de señalar y obtener respuesta sobre errores que hubiera podido cometer el juez o tribunal de la instancia inferior. Ello significa que no resulta posible excluir del ámbito del recurso ciertas categorías como las cuestiones de índole fácticas, la manera en que se incorporaron de las pruebas al proceso y la valoración que los magistrados de la instancia inferior hicieron de ellas. La forma y los medios a través de los cuales se realice la revisión dependerán de la naturaleza de las cuestiones en debate, así como de las particularidades del sistema procesal penal de los respectivos Estados<sup>23</sup>.

32. Con base en las citadas consideraciones, en el presente asunto la Comisión observa que el 23 de abril de 2007 el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José condenó al señor Sequeira Castillo a quince años de pena privativa de libertad por los delitos de peculado y negocios incompatibles con la función pública. Frente a ello, la presunta interpuso un recurso de casación, cuestionando tanto aspectos fácticos como jurídicos de la decisión de primera instancia. En razón a ello, luego que el proceso pasara por diferentes etapas recursivas, el 20 de junio de 2018 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó la citada acción.

33. Al respecto, a partir de la lectura del texto de esta última resolución, la Comisión considera que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia realizó un reexamen de la manera en que el tribunal de primera instancia valoró el plexo probatorio existente en la causa y, en respuesta a los agravios planteados por la defensa del señor Sequeira Castillo, analizó cada uno de estos y los desestimó. En ese sentido, la Comisión aprecia que el tribunal ingresó en el análisis de cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley penal sustantiva, en lo que respecta a la subsunción de la conducta del peticionario al tipo penal atribuido. Por ende, la Comisión considera que, *prima facie*, no se han presentado argumentos o pruebas que permitan identificar alguna restricción o limitación que haya evitado un análisis integral de los cuestionamientos planteados por el señor Sequeira Castillo contra su fallo condenatorio de primera instancia. Por consiguiente, la CIDH concluye

<sup>18</sup> Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158

<sup>19</sup> Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 90.

<sup>20</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 272 a 274.

<sup>21</sup> Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Párr. 270.

<sup>22</sup> CIDH. Informe No. 55/97. Caso 11.137. Fondo. Juan Carlos Abella. Argentina. 18 de noviembre de 1997. Párr. 261.

<sup>23</sup> CIDH, Informe No. 172/10, Caso 12.561, Fondo, César Alberto Mendoza y otros (Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes), Argentina, 2 de noviembre de 2010, párr. 189.



que, *prima facie*, no se han aportado elementos que permitan identificar una posible vulneración al derecho contemplado en el artículo 8.2.h) de la Convención.

34. Ahora bien, respecto al segundo punto, referido a la afectación al derecho a contar con un juzgado imparcial, la Comisión observa que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el reclamo planteado por la presunta víctima y dispuso que una nueva integración de jueces y juezas resuelva el recurso de casación de la presunta víctima. En tal sentido, la Comisión considera que las autoridades atendieron debidamente el reclamo presentado por el señor Sequeira Castillo. Por ello, con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el presente asunto no presenta elementos que puedan involucrar una posible afectación de los derechos consagrados en la Convención Americana u otros tratados interamericanos.

## **IX. DECISIÓN**

1. Declarar inadmisibile la presente petición; y
2. Notificar a las partes la presente decisión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 29 días del mes de diciembre de 2023. (Firmado): Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón, Stuardo Ralón Orellana, Carlos Bernal Pulido y José Luis Caballero Ochoa, miembros de la Comisión.